

# Boletín Oficial

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 10, á 8 reales al mes para esta capital, y 10 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á real el pliego.

### PARTE OFICIAL.

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

#### ARTICULO DE OFICIO.

#### GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 112.

En la Gaceta de Madrid núm. 45 del 14 de febrero se lee lo siguiente:

#### REAL DECRETO.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española: Reina de las Españas: al Gobernador y Consejo provincial de Toledo, y á cuáquiera otras Autoridades y personas á quienes tocara su observancia y cumplimiento, que he venido en decretar lo siguiente:

En el pleito que en mi Consejo Real pende por recurso de revision que han interpuesto D. José Safont, vecino de esta corte, y en su nombre el Licenciado D. Santiago Alcázar, y el Banco de España, defendido por el Lic. D. Antonio Ullach, contra el Real decreto de 25 de mayo de 1853, que resolvió definitivamente la instancia de apelación seguida ante el mismo Consejo entre mi Fiscal, en representación del Ayuntamiento constitucional y la Fábrica de armas blancas de la ciudad de Toledo, apelantes, y el citado D. José Safont, apelado, sobre demolición de la altura dada por este á la presa titulada del Corregidor, y demas particulares cuestionados:

Vistos:

Visto el Real decreto resolutorio de 25 de mayo de 1853, que dice así: "En el pleito que en mi Consejo Real pende en grado de apelación, entre partes, de la una el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo y la Fábrica nacional de armas blancas de la expresada ciudad, á quienes representa mi Fiscal, apelantes, y de la otra D. José Safont, vecino

de Madrid, y el Lic. D. Ramon Navarro, su Abogado defensor, apelado, sobre demolición de las obras ejecutadas por Safont en la presa titulada del Corregidor, sobre el rio Tajo, y otros particulares contenidos en las respectivas demandas:

• Visto el expediente gubernativo instruido con motivo de la instancia elevada á mi Gobierno en 26 de enero de 1853 por Doña Magdalena Escáñez, viuda de D. Antonio Navarro, Corregidor que fué de Toledo, solicitando se le concediese la propiedad de las obras emprendidas en dicha ciudad por su difunto esposo á sus expensas y con fondos de la mitra y cruzada, consistentes en una casa-huerta, un plantío de árboles en los cerros inmediatos, un tejár, un cañar, una presa y mina para dar riego á las tierras de la vega, ofreciendo concluir las expresadas obras, y comprometiéndose á pagar por las tierras el canon correspondiente á los propios de la ciudad, y reintegrar á la Hacienda pública el total á que ascendiesen los socorros facilitados á los presidiarios empleados en aquellas:

• Visto en el mismo expediente el informe del Ayuntamiento de Toledo oponiéndose á dicha solicitud, y manifestando la sorpresa que le causaba su contenido, por cuanto las obras se habían emprendido por el Corregidor Navarro contra la voluntad de la referida Corporación, sin su permiso, y á pesar de haberle expuesto repetidas veces que el terreno era de propios, y perjudicaba además con ellas al vecindario y á las servidumbres públicas de antiguo establecidas.

• Vista la Real orden de 18 de febrero de 1854, por la cual se resolvió:

1.º Que desde luego se concediesen á censo enfiteutico á Doña Magdalena Escáñez las 500 fanegas de tierra que solicitaba, bajo el canon de un 2 por 100 del valor en que fuesen tasadas, sin perjudicar el cordel y descanso de los ganados trashumantes.

2.º Que con las expresadas 500 fanegas de tierra había de tomar además á censo y canon los terrenos de los cerros que se hallaban plantados de vides, olivos y frutales, lindantes con la ermita que fué de San Anton, y llegaban hasta la inmediación de la presa de Navarro, incluso el en que este edificó el horno de ladrillos.

3.º Que también había de tomar á censo la parte del terreno que en la huerta correspondiese á los propios.

4.º Que igualmente se había de graduar el canon que debiese pagarse por los aprovechamientos de la pesca del cañar, situado en la presa, por estar edificado sobre terreno de propios.

5.º Que no había de poder usar la interesada de las 500 fanegas de tierra-vega hasta tanto que no hubiese sacado y puesto las aguas en disposición de surtir el riego.

6.º Que en atención á que la mayor parte de las obras habían sido hechas por los presidiarios del correccional, y con cantidades que por actos de beneficencia recibió el difunto Corregidor del Cardenal y Comisario general de Cruzada, satisfaciéndose la interesada ó sus herederos la cantidad que con presencia de los extractos de revista se graduase debían pagar.

Y 7.º Que su importe se entregase á la Sociedad económica de Amigos del País de dicha ciudad, ó á la Junta de Caridad para invertirlo en objetos de beneficencia; puesto que en ellos y en los de ornato público debieron emplearse los presidiarios, y no en los de interes individual.

• Vistos el acuerdo de los interesados para llevar á efecto dicha Real orden; el reconocimiento y tasación de los peritos, y la graduación del canon de 90 rs. por los terrenos y cañar, justipreciados aquellos en su estado primitivo y de aridez, á que dieron, el Ayuntamiento su aprobación á pesar de la protesta del Procurador síndico, y su conformidad la Diputación provincial:

• Vista la escritura censal á su virtud otorgada con D. José Safont, comprador á los herederos de Navarro de los terrenos y demas derechos concedidos á la viuda de este, en la cual se comprendieron únicamente los objetos incluidos en la tasación pericial, á saber: el terreno de los cerros de la ermita de San Anton hasta la inmediación de la presa, el ladrillar, el cañar, la casa-huerta; expresándose al celebrar el convenio, que respecto de las 500 fanegas de tierra de la Vega y la mina, nada podía tratarse:

• Vistos el expediente formado en el Gobierno político de la provincia de Toledo para la liquidación y aprecio del haber de los presidiarios, resultando deber percibir la Sociedad económica la cantidad de 30,691 rs.; y la orden de la Regencia provisional de 16 de diciembre de 1849, en que conforme á los términos de la consulta elevada por dicha Autoridad, se mandó que la expresada suma se capitalizase sobre las obras construídas por Navarro, quedando sujetas á un censo redimible, al 2 por 100 de rédito anual, como tuvo efecto:

• Vista la exposición de los herederos de Navarro de 29 de enero de 1841, pidiendo al Ayuntamiento que para continuar las obras necesarias á trasladar las aguas por la mina á la Vega, se pro-

cediese al reconocimiento de la cantidad y calidad de las tierras que podían y debían regarse, á su demarcación y justiprecio, como también al señalamiento de las servidumbres á que estaban afectas:

• Visto sobre el particular el informe del representante de la Mesta, oponiéndose á que en el número de las 500 fanegas concedidas á la viuda de Navarro, se contase la porción de terreno de la Vega, que de tiempo inmemorial servía de abrevadero, descanso y tránsito de los ganados estantes y trashumantes:

• Visto el de los Procuradores síndicos; manifestando la dificultad que se ofrecía en cuanto á la concesión de tales tierras, por las mismas razones, y por ser la Vega de aprovechamiento común y estar llena de servidumbres públicas.

• Vista la escritura de venta que en 5 de diciembre de 1842 otorgaron los herederos de Navarro á favor de Safont, de la presa con las obras que le pertenecían de la casa-huerta, tejár y varias obras contiguas, segun expresion del testimonio en relación unido á los autos:

• Vista la instancia de Safont de 11 de julio de 1844, solicitando ante el Juzgado privativo del Señorío de las huertas tituladas del Rey, prestase su consentimiento para levantar dicha presa, con objeto de encañonar las aguas del Tajo para dar movimiento á unos molinos harineros que acababa de construir á la inmediación del mismo río:

• Y vistos asimismo el expediente que con este motivo se instruyó, y la concesión acordada en junta de interesados, entre ellos la de Beneficencia, bajo la obligación de responder Safont á los daños y perjuicios que se causasen á las huertas y de ejecutar las obras de precaución necesarias para evitarlo en lo sucesivo:

• Vista la comunicación del administrador del Señorío de las huertas, que en 4 de agosto de 1846 pasó al referido Juzgado, poniendo en su conocimiento haber visto en el día anterior hallarse trabajando y preparando lo necesario para la elaboración de la presa los operarios de Safont, sin que este hubiese llevado á efecto nada de cuanto se había acordado por la Junta:

• Vistas las denuncias de nueva obra ante el Juzgado de primera instancia de Toledo, incoadas por la fábrica nacional de armas blancas en 7 de noviembre de 1845 y 16 de setiembre de 1844; la primera á causa de haber Safont continuado la mina, y la segunda con motivo de la alzada que estaba dando á la presa de la parada de sus molinos, alegándose el temor de que con estas obras se iba á



perjudicar á la fábrica, privando á las máquinas de las aguas suficientes para sus movimientos; cuyo último estado es el de haberse mandado la suspensión de dichas obras:

»Vistas la Real orden de 15 de julio de dicho año de 46, en la cual, previos los oportunos informes, á virtud de nuevas quejas de la fábrica al Gefe político de Toledo, se previno á este que mandase suspender las obras hechas en la presa antigua, siempre que alterasen las condiciones que anteriormente existían; la orden del mismo Gefe político de 21 de agosto del referido año intimando á Safont la suspensión acordada por la Supremacía; las reclamaciones de este y la Real resolución de 15 de enero de 1847 declarando que el conocimiento de este negocio correspondía al Consejo provincial, ante el cual podían las partes deducir sus derechos, y disponiendo que continuase la suspensión de las obras prescrita en la de 15 de julio antes citada:

»Vista la demanda que en consecuencia de esta resolución entabló el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Toledo, á nombre de la Corporación municipal y de la Junta de Beneficencia, alegando como puntos de hecho que la mina y presa se habían concedido á la viuda de Navarro con el exclusivo objeto de conducir las aguas del Tajo para regar la mayor parte posible de la Vega, y que no se había establecido el canon que por dicha presa se había de satisfacer, porque no había sido posible graduarlo antes de conseguirse el objeto de la concesión, que fué el riego:

»Que Safont no había concluido la mina ni conducido las aguas:

»Que se estaba aprovechando de la presa para dar movimiento á unos molinos sin nueva concesión del Gobierno ni del Ayuntamiento, y sin haber reconocido mayor canon que el que antes pagaba, en el cual no se había comprendido la presa y si solo el cañar:

»Que había elevado aquella de una manera en extremo peligrosa sin previa licencia de Autoridad competente, por lo que solicitó que se declarase que Safont no había podido utilizar la presa del Corregidor, concedida para un objeto determinado en otro diferente, sin consentimiento de aquella Corporación como dueño directo del terreno, ó nueva concesión del Gobierno:

»Que se le condenase á la pérdida de lo edificado ó á su demolición, compeliéndole á que en un término prudente llevase á cabo la conducción de las aguas de la Vega, y no verificándolo quedase sin derecho al enfiteusis:

»Que igualmente se le condenase á rebajar la altura de la presa hasta dejarla á la que tenía al concederla á la viuda de Navarro:

»Que en otro caso se declarara á favor del caudal de propios el incremento que debía tener el canon que se fijó á Safont, en el supuesto que no había de utilizar la presa mas que para el cañar de pesca; señalándole el que hubiese de satisfacer por la utilidad de los molinos y rodetes que había construido:

»Vista la demanda del señero de las huertas del Rey, pidiendo se condenase á Safont á restituir la presa á su primitivo estado y á su costa, ó en el caso de no estimarse esto justo ni conveniente, al menos se le designase un término breve y preteritorio, dentro del cual ejecutara las obras de precaución ofrecidas, y resarciera los daños ya causados, y que en el tercero día otorgase la escritura de fianza para seguridad de la indemnización sucesiva.

»Vista la de la fábrica nacional de armas blancas, en que adhiriéndose á la de la Corporación municipal en la que no fuese contraria, pretendió que se obligase á Safont á destruir á su costa la alzada de tres pies que había dado á la presa, y se le prohibiese ademas que

bajo concepto alguno sacase por la mina la mas pequeña porción de agua:

»Vista la contestación del demandado con la solicitud de que se declarase que como Señor del dominio útil del terreno en que había edificado, había podido utilizarse de él levantando la presa de que era dueño y hacer los artefactos que le habían parecido oportunos, sin licencia del Gobierno ni del Ayuntamiento, en concepto de Señor directo del suelo; que este no tenía derecho á reclamar mas pensión que la correspondiente á los terrenos dados en enfiteusis, y no al de los capitales invertidos en ellos, ni á imponer otros gravámenes que los establecidos en la Real orden de 18 de febrero de 1854, y los estipulados en la escritura de enfiteusis; que Safont lo había tenido para levantar la presa y lo tenía para que permaneciera á la altura en que se encontraba mientras no perjudicase derechos anteriormente adquiridos, y que no se pudiesen reparar estos daños de otro modo; que con respecto al señorio de las huertas se declarase que no estaba obligado Safont á rebajar la presa á su antigua altura, sino á hacer las obras prometidas y á prestar la fianza, la cual quedaria cancelada tan pronto como aquellas se ejecutasen; y por último, que tenía asimismo derecho á regar, según la Real orden de concesión, hasta 500 fanegas de tierra de la Vega y sacar por la mina el agua necesaria para ello, no perjudicando á la fábrica de armas, y que esta, ni aun en tal caso, lo tenía para exigir se rebajase la presa, sino para que se fijase la cantidad de agua que debía aprovechar para el riego:

»Vistas las puebas practicadas por las partes, y en ellas los documentos compulsados por parte del Ayuntamiento, á fin de acreditar que las 500 fanegas de tierra de la Vega eran de aprovechamiento común, pertenecían al coto llamado de Silla y Albarda, y tenían la servidumbre del descanso y suelta de los ganados estantes y trashumantes:

»Vista en las mismas pruebas la certificación del Secretario de dicho Ayuntamiento, en que afirma que, reconocidas las actas de los años desde 1827 hasta el de 1848 inclusive, en ninguna de ellas aparecía que por el Corregidor Navarro, su viuda y herederos, ni por D. José Safont se hubiese solicitado licencia del Ayuntamiento para la ejecución de las obras, ni para elevar la presa despues de su primitiva construcción:

»Vistos en ellas los capítulos 6.º y 10.º de las Ordenanzas municipales de Toledo, por los cuales se prohibe hacer molino ó noria á la parte superior de la labor de otro sin que preceda reconocimiento pericial y se ejecute la obra según el perito viere y entendiere que debe hacerse, ni construir presa ó otra fortaleza nueva en ninguna heredad por la que venza daño á molinos antiguos ó á otra heredad, y se previene que quien lo hiciere debe, ademas de condenarse á la pena y resarcimiento que en ellos se designan, deshacer luego la obra á su costa:

»Vistas en las citadas pruebas las compulsas de varios expedientes formados en virtud de instancias para la construcción ó renovación de obras en el Tajo, de los que aparece la práctica observada de pedirse previamente permiso al Ayuntamiento, que no otorgaba aquel sin haber precedido las formalidades prescritas en los mencionados artículos:

»Vistos los informes y declaraciones periciales, que convienen en que la elevación de la presa y el paso de las aguas por la mina debían producir un aumento de evaporación de estas é infiltraciones mas ó menos considerables:

»Vistos los oficios del Director general de Artillería de 15 de mayo de 1847 y 4 de abril de 1850, dirigidos al Ministerio de la Guerra, manifestando en el primero haber faltado desde el primer verano, despues de construídas las obras

en cuestión, el agua necesaria para el movimiento de las máquinas de dicha fábrica de armas, y en el segundo que D. José Safont había terminado las ejecutadas sobre el Tajo, sangrándolo y sacando sus aguas á la Vega, y haciendo que la fábrica tuviese que suspender, en el mes de junio, completamente sus labores:

»Vista la sentencia del Consejo provincial, pronunciada en 2 de mayo de 1849, por la que se absolvió á D. José Safont de la demanda de la Administración municipal en cuanto á la demolición de los molinos y rodetes, rebaja de la presa á su antiguo estado y aumento de canon subsidiariamente solicitado, condenándole á realizar las obras precautorias respectivas á las huertas del Rey y al resarcimiento de daños y perjuicios, y se declaró asimismo que Safont podía continuar las obras de la mina para traer el agua, precisa para el riego de las 300 fanegas de tierra de la Vega, según prevenia la Real concesión excepto cuando fuese tal la escasez del caudal del Tajo que se paralizasen las máquinas actuales de la fábrica de armas, en cuyo caso solo podria regarse en los días y horas en que cesasen los trabajos:

»Vistos los recursos de apelación interpuestos y continuados en esta instancia unicamente por parte del Alcalde representante del Ayuntamiento de Toledo, y por la Junta directiva de la expresada fábrica á que se adhirió D. José Safont, y el auto á que se admitió la apelación en ambos efectos:

»Vista la demanda de agravios propuesta por mi Fiscal en representación de las dos partes apelantes, con la solicitud de que se reforme el fallo del inferior condenando á D. José Safont, por lo que hace á la fábrica de armas, á que destruya á su costa la obra con que se ha aumentado la elevación de la presa del Corregidor, restituyendo esta á la altura que tenía cuando la acabó de hacer el Corregidor Navarro, prohibiéndole ademas que, bajo ningún concepto saque la mas pequeña porción de agua del río por la mina; y por lo tocante al Ayuntamiento, á que Safont restituya la presa á su primitivo estado, y abandone los trabajos de la mina que para el riego de la Vega ha dispuesto, sin tener derecho á las obras principiadas, ni á las tierras que pretende fertilizar:

»Visto el escrito en que Safont, contestando á uno y otro extremo de la demanda, pide que se desestime la pretensión del Ministerio fiscal y se confirme el definitivo del inferior ampliándole á que sean de cuenta y cargo de los demandantes los gastos, daños y perjuicios que se le han originado:

»Visto el acuerdo de la seccion de lo contencioso de mi Consejo Real, por el cual, en conformidad á lo dispuesto en el art. 257 del Reglamento de 30 de diciembre de 1846, y á instancia de mi Fiscal, se mandó librar orden al Gobernador de la provincia de Toledo para que dispusiese lo conveniente á fin de conservar á la fábrica de armas el libre uso y aprovechamiento de las aguas del río Tajo en la forma que lo tenía al tiempo de dictarse la sentencia del Consejo provincial, sin permitir se hiciese novedad hasta que recayese fallo definitivo en la segunda instancia:

»Vista la ley 6.ª, título 28 de la partida 3.ª, que comprende entre otras cosas públicas los ríos:

»Vistos la ley 13, título 32 de la citada Partida; el art. 4.º del Real decreto de 31 de agosto de 1819, y la Real orden de 5 de abril de 1834, según los cuales se necesita previo permiso de mi Gobierno para toda obra en los ríos navegables ó no navegables, y se prohibe que despues de obtenido aquel se use de las aguas de otro modo ni para un objeto distinto del expresado en la concesión:

»Vista la Real orden de 14 de marzo de 1846, anterior á la conclusion de la sobrepresa y de las obras ejecutadas por Safont en el Tajo, en cuyo art. 1.º, de conformidad con la legislación vigente, se

impone la necesidad de Real autorización, previo el oportuno expediente, para permitir el establecimiento de cualquier empresa de interes privado que tenga por objeto ó pueda hallarse en relacion inmediata con el curso ó régimen de los ríos, sean ó no navegables ó flotables, con el uso, aprovechamiento y distribución de sus aguas, y con la construcción de toda clase de obras nuevas en los mismos ríos:

»Vistas la ley 13, título 32, y la 8.ª, título 28 de la partida mencionada, que prohiben hacer en los ríos labor que impida el uso común, ó altere el curso que solia tener; y mandan que si tal labor se hiciese de nuevo, ó estuviese hecha de antiguo, debe ser derribada:

»Vista la ley 9.ª del citado título 28, que declara comprendidos entre las cosas del comun los egidos:

»Vista la ley 7.ª, título 29 de la misma Partida tercera, según la cual no se puede ganar por tiempo, plaza, calle, camino, dehesa, egido ni otro lugar, cuyo uso sea comun del pueblo:

»Vistas las leyes 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª, título 21, libro 7.º de la Novísima Recopilación, que prohiben la enajenación de los egidos y términos de los pueblos, y señalan las penas en que incurrén los Corregidores, Alcaldes mayores, Regidores y Oficiales de Ayuntamiento, que tomasen tierras del comun:

»Vista la ley 13, título 16 del mismo libro, en la que se previene que al dotar á los pueblos de bienes propios para cubrir sus gastos, se haga de modo que no se perjudique á la libertad y disfrute de los bienes comunes:

»Vistas las Reales provisiones de 20 de abril de 1761, y 7 de julio de 1765, la instrucción de 23 de mayo de 1760, y las demas disposiciones vigentes sobre la materia, y entre ellas mas principalmente los Reales decretos de 3 de abril de 1824, y 6 de marzo y 24 de agosto de 1834, que confirman el antiguo principio de no poder enajenar, ni aun con el consentimiento de los Ayuntamientos, los egidos y terrenos de uso comun de los vecinos de los pueblos:

»Vista la ley 1.ª del título 16, lib. 7.º antes citados, que prohibe hacer merced de propios, y anula los que se hubiesen hecho:

»Vistos los artículos 74 y 80 de la ley de Ayuntamientos de 8 de enero de 1845, según el primero de los cuales corresponde al Alcalde procurar la conservación de las fincas pertenecientes al comun, y cuidar de todo lo relativo á policía urbana y rural, conforme á las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales; y según el segundo, es atribución de los Ayuntamientos arreglar, por medio de acuerdos, el sistema de administración de los propios del comun y el disfrute de los pastos, aguas y demas aprovechamientos comunes:

»Considerando que las obras para dar mayor elevación á la presa se principiaron y continuaron sin permiso de mi Gobierno, ni del Ayuntamiento de Toledo, contravieniéndose expresamente á las Reales disposiciones citadas y á las ordenanzas municipales:

»Considerando que las 300 fanegas de tierra de la Vega se concedieron á la viuda de Navarro con la condicion de que había de satisfacer por ellas á los propios de Toledo el canon de 2 por 100 del valor en que fuesen tasadas; que no se había de perjudicar á las servidumbres públicas y que no había de poder la interesada usar de dichas tierras hasta que se verificase la conducción de las aguas á las mismas:

»Considerando que dichas condiciones no se han cumplido respecto de la primera, por no haber habido avenencia con el Ayuntamiento; ni han podido ni pueden cumplirse en cuanto á las dos últimas, porque según consta de las pruebas aducidas en estos autos, las mencionadas tierras son de aprovechamiento comun y estan cruzadas de servidumbres; y no se



pueden conducir á ellas las aguas por la mina, habiendo reclamado contra su dis-  
traccion del Tajo la fabrica de armas y  
otros terceros interesados que tenian de-  
rechos anteriores:

Considerando que no pudiendo llevarse  
á efecto la concesion de las 300 fanegas de  
tierra, tampoco se debe permitir que  
Safont continúe apropiándose de la  
presa y mina, cedidas á la viuda de Na-  
varro con este único objeto, y construidas  
anteriormente por el Corregidor de To-  
ledo en terreno de propios con fondos pú-  
blicos y sin la autorizacion competente:

«Considerando que tampoco puede re-  
conocerse á Safont ningun otro título para  
conservar la presa y mina, porque al otor-  
garse la escritura de censo de 11 de fe-  
brero de 1813, ya se le manifestó por los  
comisionados del Ayuntamiento que en  
ella solo se comprendian los terrenos de  
los cerros hasta la presa, el del horno de  
ladrillos, el cañar y casa-huerta, ó sean  
las 24 fanegas de tierra que fueron ob-  
jeto de la tasacion pericial, habiendo por  
consiguiente emprendido Safont las obras  
por voluntad propia, destinándolas á ob-  
jetos de su exclusiva utilidad y continuán-  
dolas contra lo dispuesto en las Reales  
órdenes dictadas en virtud de las recla-  
maciones de los interesados:

«Considerando que si las partes tuvie-  
ran que reclamar sobre la inteligencia y  
efectos de los contratos de acensuamiento  
corresponderia resolver á los Tribunales  
ordinarios:

«Vengo en mandar se destruyan las  
obras ejecutadas por D. José Safont para  
dar mayor elevacion á la presa titulada  
del Corregidor Navarro; que respecto de  
las 300 fanegas de tierra en cuestion, y  
de la presa y mina construidas para el rie-  
go de la Vega, quede sin efecto la conce-  
sion hecha por la Real orden de 18 de  
febrero de 1834, y que el Ayuntamiento  
de Toledo use en cuanto á ellas de las  
facultades que le concede la ley de 8 de  
enero de 1845, reservando á las partes  
su derecho para que, sobre la inteligencia  
y efectos de los contratos censuales, lo  
ejerciten donde y segun corresponda:

«Y en lo que á esta mi Real resolucion  
fuere contraria la sentencia apelada, se  
revoca, y en lo que no se confirma.»

Visto el escrito del Banco de España,  
mostrándose parte en estos autos, y pi-  
diendo se declarase sin efecto todo lo ac-  
tuado en ellos sin su audiencia desde  
principios de diciembre de 1851 y que se  
repusieran al estado que entonces tuvie-  
sen, mediante haber sucedido en los de-  
rechos de D. José Safont, en virtud de la  
adjudicacion que en pago de mas de cinco  
millones de reales que este le adeudaba,  
le habia sido hecha por el Tribunal de  
Comercio de esta corte, de la fabrica de  
harinas, molinos, rodetes, cañar y terreno  
comprendido desde la ermita de S. Anton  
hasta la presa del Corregidor Navarro,  
finca todas sobre que versaba el presente  
litigio, y de las cuales habia tomado po-  
sesion en 2 y 3 de diciembre de 1851,  
segun lo acreditaba por el testimonio de  
las actuaciones del juicio ejecutivo, que en  
dicho Tribunal se hallaba pendiente de  
los trámites ulteriores:

Vista la conformidad de D. José Safont  
respecto de la adjudicacion de las men-  
cionadas fincas, mas sosteniendo su propio  
derecho en cuanto á la mina, y las 300  
fanegas de tierra de la Vega que no ha-  
bian podido ser objeto del procedimiento  
ejecutivo:

Visto el auto de 9 de enero de 1856,  
por el cual se declaró no haber lugar á  
la nulidad y reposicion pedida por el Ban-  
co, admitiéndole sin embargo como parte  
en el estado actual de la contienda:

Visto el recurso de revision propuesto  
por el referido Banco y D. José Safont, y  
fundado:

Primero. En que la sentencia conte-  
nida en el Real decreto de 25 de mayo  
ha recaído sobre cosas no pedidas en las  
demandas de las partes en primera ins-  
tancia.

Segundo. En que se han dictado en  
ella resoluciones contrarias entre sí res-  
pecto á los mismos litigantes, sobre el  
propio objeto y en fuerza de idénticos fun-  
damentos; habiéndose fallado en estos dos  
casos á lo prescrito en los artículos 228,  
párrafo segundo; 229, 259 y 261 del re-  
glamento de 30 de diciembre de 1816.

Y tercero. En que despues de pronun-  
ciado, se han recobrado documentos de-  
cisivos, detenidos por fuerza mayor, lo  
cual da lugar al recurso, de conformidad  
con el art. 231 del mismo:

Vista la Real orden de 25 de abril de  
1855, en que apoya el Banco de España  
el tercer fundamento de su recurso, por  
la que, á instancia del Gobernador del  
mismo establecimiento y previo el oportu-  
no expediente, tuvo á bien conceder la  
Real habilitacion solicitada por aquel, au-  
torizando la continuacion de la presa con  
la altura que hoy tiene, con las condicio-  
nes de construir las obras de precaucion  
necesarias bajo la inspeccion del Ingeniero  
de la provincia, y sin perjuicio de los  
derechos de propiedad de cualquiera otro  
interesado:

Vistas las pretensiones de las partes re-  
currentes, en solicitud de que, admitién-  
dose el recurso de revision y rescindién-  
dose la sentencia definitiva, se declare á  
Don José Safont con derecho á utilizar  
las 300 fanegas de tierra de la Vega,  
siempre que haya cumplido con las condi-  
ciones de la Real concesion; que no tiene  
derecho el Ayuntamiento de Toledo á la  
presa y mina, por ser Safont único y ex-  
clusivo dueño de dichas obras; que se de-  
clare igualmente el derecho que á este  
corresponde á que se conceda el riego de  
la Vega, como independiente de la eleva-  
cion dada posteriormente á la presa; que  
se absuelva al Banco de España de las de-  
mandas de la municipalidad y Direccion  
de la fabrica de armas blancas de Toledo  
en cuanto á la rebaja de la presa á su an-  
terior estado; que respecto á la ejecucion  
de las obras en el rio Tajo con objeto de  
precaucion la eventualidad de futuros per-  
juicios, se cumpla lo prevenido en la Real  
orden de 25 de abril de 1855, declarando  
asimismo válida y subsistente la Real ór-  
den de concesion de 18 de febrero de 1834  
en todos sus extremos, y proveyéndose  
únicamente á la falta de aguas para la fá-  
brica de armas en tiempo de escasez, de  
las del Tajo en los términos contenidos en  
la sentencia del Consejo provincial:

Visto el escrito de contestacion de mi  
Fiscal, en que pide se confirme el Real de-  
creto de 25 de Mayo de 1853, en cuanto  
se manda por él destruir las obras ejecu-  
tadas por D. José Safont para dar mayor  
altura á la presa del Corregidor, y que se  
rescinda en la parte que deja sin efecto la  
concesion hecha por la Real orden de 18  
de febrero de 1834 respecto á las 300 fa-  
negas de tierra en cuestion, y á la presa y  
mina construidas para el riego de la Vega;  
declarando en su consecuencia subsistente  
la expresada Real orden de 18 de febrero,  
sin perjuicio de las servidumbres públicas  
que afectan al terreno de la Vega, y de  
las precauciones antes indicadas para que  
no falte el agua á la fabrica de armas  
blancas, y mandándose llevar tambien á  
efecto la última parte de dicho Real de-  
creto, que reserva á los interesados su de-  
recho para ante el Tribunal competente  
por lo respectivo á la inteligencia y efec-  
tos de contratos censuales:

Visto el art. 228, cap. 16, seccion se-  
gunda del reglamento de 30 de diciem-  
bre de 1846 sobre revision de las resolu-  
ciones, segun el cual habrá lugar á la re-  
vision de una definitiva: primero, si hu-  
biere contrariedad en sus disposiciones;  
segundo, si hubiera recaído sobre cosas  
no pedidas:

Visto el art. 229, que dice así: «Habrá  
lugar á la revision, cuando el Consejo hu-  
biere dictado resoluciones contrarias entre  
sí, respecto á los mismos litigantes, sobre  
el propio objeto y en fuerza de idénticos  
fundamentos.»

Visto el art. 231, que declara proce-

dente la revision de una definitiva, si des-  
pues de pronunciada se recobrasen docu-  
mentos decisivos, detenidos por fuerza  
mayor, ó por obra de la parte en cuyo  
favor se hubiere dictado:

Visto el art. 259, en que se establece  
que no se admitirá en la instancia de  
apelacion ninguna pretension ni excep-  
cion nueva, salvo aquellas que no se ha-  
yan podido proponer en la primera ins-  
tancia:

Visto el art. 261, disponiendo que el  
Consejo no podrá fallar sobre ninguno de  
los capítulos de la demanda que no se  
hubieren propuesto á la decision del in-  
ferior, salvo si se tratase de compensa-  
cion, intereses ó daños y perjuicios de  
origen posterior á la definitiva de prime-  
ra instancia:

Considerando que la fabrica de armas  
blancas de Toledo en su demanda de pri-  
mera instancia pidió, entre otras cosas,  
que se prohibiese á D. José Safont el que  
bajo concepto alguno sacase por la mina  
la mas pequeña porcion de las aguas del  
rio Tajo:

Considerando que D. José Safont, al  
contestar á esta parte de la demanda,  
afirmó que no podia dársele otro sentido  
que el de pretender quedase sin efecto la  
Real orden de 18 de febrero de 1834,  
puesto que por ella se concedieron á la  
viuda del Corregidor Navarro las 300 fa-  
negas de tierra de la Vega con la precisa  
circunstancia de proporcionarlas el riego  
por la expresada mina.

Considerando que si esta era, (segun  
confiesa el mismo Safont) la única signifi-  
cacion que admitia la pretension del de-  
mandante en el extremo propuesto, en  
idéntico sentido la resolvió el Real decre-  
to de 25 de mayo de 1853 mandando  
que respecto de las 300 fanegas de tierra  
quedase sin efecto la Real orden de con-  
cesion, porque siendo condicion indispen-  
sable para adquirir el dominio útil de las  
mismas conducir á ellas el riego por la  
mina, era tambien consecuencia forzosa  
que, declarada en este último punto ine-  
ficaz la referida Real orden, segun lo pre-  
tendido en la demanda, lo quedase igual-  
mente en cuanto á los demas extremos in-  
dicados virtual y necesariamente com-  
prendidos en ella por ser inseparables y  
depender todos ellos del exclusivo objeto  
condicional de la concesion:

Considerando que, habiendo por lo tan-  
to recaído sentencia definitiva en segunda  
instancia sobre lo mismo que la fabrica de  
armas blancas de Toledo pidió en la pri-  
mera, es inaplicable al Real decreto de  
23 de mayo de 1853 la disposicion del  
párrafo segundo del art. 228 del regla-  
mento de 30 de diciembre de 1816:

Considerando que tampoco puede  
aplicársele lo dispuesto en el art. 229,  
en razon á que su expreso tenor, aclara-  
do aun mas por el del párrafo segundo  
del art. 255, se refiere al caso en que  
haya contrariedad entre dos sentencias,  
ó sea resoluciones definitivas, lo cual  
está muy lejos de verificarse en el pre-  
sente, siendo una sola la resolucion de  
que se trata:

Considerando que tampoco concurren  
en este caso las demas circunstancias de  
identidad de objeto y fundamentos, aun-  
que la hubiese de personas, por cuanto  
la Real orden de 18 de febrero de 1834  
decidió muy diversas cuestiones que  
dieron origen á diferentes demandas,  
cuyos capítulos pudieron en parte con-  
firmarse y en parte invalidarse, como se  
hizo por el Real decreto resolutorio que  
se impugna:

Considerando que no es menos impro-  
cedente la aplicacion á la cuestion actual  
del art. 231 del mismo reglamento, su-  
puesto que la Real orden de 25 de abril  
de 1855, traída á los autos por la parte  
del Banco de España como documento  
decisivo, prescindiendo de la fuerza que  
pueda tener en este juicio, fué expedida  
dos años despues de pronunciada la sen-  
tencia de segunda instancia, y que por  
consiguiente, no habiendo tenido exis-

tencia anterior, carece de los requisitos  
del citado art. 231, por no poder reco-  
brarse lo que nunca se llegó á poseer,  
ni detenerse por otro lo no existente  
hasta aquella fecha:

Considerando, en fin, que por las ra-  
zones expuestas no pueden sostenerse  
los fundamentos del recurso, no habién-  
dose incurrido, al dictar el fallo contra  
el cual se dirige, en ninguno de los  
artículos ya citados, ni en los demas  
que dan lugar á la revision de una  
definitiva:

Oído mi Consejo Real, en sesion á que  
asistieron D. Domingo Ruiz de la Vega,  
Presidente; D. Manuel Garcia Gallardo,  
D. Florencio Rodriguez Vaamonde, Don  
Antonio Caballero, D. Cayetano de Zú-  
ñiga y Linares, D. José Veluti, Don  
Manuel de Sierra y Moya, D. José Ruiz  
de Apodaca, D. Antonio Navarro de las  
Casas, D. José Maria Trillo; D. José  
Antonio de Olafeta, D. Antonio Escen-  
doro, D. Diego Lopez Ballesteros, Don  
José Sandino y Miranda, D. Fernando  
Alvarez, D. Fermin Salcedo y D. José  
Caveda.

Vengo en declarar no haber lugar al  
recurso de revision propuesto por el  
Banco de España y D. José Safont contra  
mi Real decreto de 25 de mayo de 1853;  
el cual se lleve á debida ejecucion en  
todas sus partes.

Dado en Palacio á 20 de enero de  
1858.—Está rubricado de la Real mano.  
—El Ministro de la Gobernacion, Ven-  
tura Diaz.

Publicacion.—Leído y publicado el  
anterior Real decreto por mi el Sacre-  
tario general del Consejo Real, hallándose  
celebrando audiencia pública el Consejo  
pleno, acordó que se tenga como resolu-  
cion final en la instancia y autos á que  
se refiere; que se una á los mismos; se  
notifique á las partes por cédula de Ugier,  
y se inserte en la Gaceta, de que cer-  
tifico.

Madrid 20 de enero de 1858.—Juan  
Sunyé.

Lo que se inserta en el Boletín oficial  
para conocimiento del público. Orense 12  
de marzo de 1858.—El Gobernador, José  
Primo de Rivera.

## CONSEJO PROVINCIAL DE ORENSE.

Los individuos que componen el mismo  
en union del Comisario de guerra de esta  
provincia.

Certifican: Que segun los datos que  
tienen á la vista de los precios á que se  
han vendido durante el mes de febrero  
actual los artículos que á continuacion se  
expresan, resultan por término medio  
el de noventa y seis céntimos racion de  
pan; cuarenta y ocho reales ochenta y  
cinco céntimos fanega de trigo; treinta rs.  
veinte y ocho céntimos la de centeno;  
veinte y siete rs. treinta y siete céntimos  
la de cebada; veintinueve rs. ochenta y tres  
céntimos la de maiz; un real noventa y  
seis cént. la arroba de paja; tres reales  
cincuenta y siete cént. la de yerba; diez  
y ocho céntimos onza de aceite; un real  
cuatro céntimos arroba de leña; y tres  
reales noventa y ocho cént. la de carbon;  
todo de peso y medida de Castilla. Y para  
los efectos que dispone el artículo 4.º de la  
Real orden de 16 de agosto de 1848  
el 3.º de la de 4 de abril de 1850, dan  
este testimonio en Orense á 27 de febrero  
de 1858.—E. P., José Primo de Rivera.  
—E. C., Manuel Ferreiro Cid.—E. C.,  
Manuel Rolan.—El Secret.º, José Benito  
Siso y Ruiz.—El Comisario de Guerra.—  
Miguel Ruiz.

ESPECIES.	REALES.
Racion de pan. . . . .	0.96
Fanega de trigo. . . . .	48.85
Idem de centeno. . . . .	30.23



Idem de cebada. . . . .	27-37
Idem de maiz. . . . .	29-33
Arroba de paja. . . . .	1-96
Idem de yerba. . . . .	3-57
Onza de aceite. . . . .	0-18
Arroba de leña. . . . .	1-01
Idem de carbon. . . . .	3-98

## ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE HACIENDA PUBLICA DE ESTA PROVINCIA.

### Territorial.—Circular.

La falta de presentacion en esta Oficina de varios repartimientos de Contribucion territorial que debieron realizar los pueblos despues del tiempo transcurrido desde que finalizó el plazo para cumplimentar este servicio, está llamando su atencion, porque ademas del compromiso que contrar con la superioridad en consentir una falta de tanta trascendencia, incurre en la que es consiguiente, si por su parte y en tiempo oportuno no terminase las diferentes y complicadas operaciones que tiene que practicar con las matrices y recibos de Talon que irremisiblemente ha de entregar al Recaudador general de la provincia en tiempo oportuno para efectuar la cobranza del segundo trimestre. En este estado, no siendo posible consentir por mas tiempo la falta de presentacion de los mencionados repartimientos, les llegado el caso con bastante disgusto no solo de declararles incurso en la multa de 200 rs. á los que en 22 del actual aparezcan en descubierto que pedirá al Sr. Gobernador se hagan efectivos, sino que partirán comisionados por su cuenta mientras que no les acrediten tener cumplido este servicio. Orense 11 de marzo de 1858.—*Luis Romero.*

### EXPEDIENTES DE PERDON.

#### Circular.

El Sr. Gobernador de la provincia con fecha de hoy me dice lo siguiente:

En vista de las consultas hechas por los Ayuntamientos de Ribadavia y Pelin, que V. S. se ha servido trasladar en oficios de 6 y 8 del actual, por regla general y en conferencia á que con V. S. asistió en mi despacho el representante de la Diputacion provincial, se ha resuelto que todos los Ayuntamientos que puedan ser acreedores á perdon en sus contribuciones por la pérdida de la cosecha de vino, están en el caso de instruir expedientes justificativos por lo que hace al año último de 1857, del propio modo que por algunos fueron presentados por lo tocante al anterior de 1856.—Lo comunico á V. S. á fin de que se sirva comunicarlo por medio de circular; advirtiéndole á los Ayuntamientos que para las justificaciones testificales y periciales no se valgan de personas que estén vecindadas en el respectivo distrito, ó que por otra circunstancia sean directamente interesados en la cuestion relativamente al mismo.

En su consecuencia, al insertarse en el presente Boletín para conocimiento de los dos mencionados Ayuntamientos y demas que se encuentren en este caso, debo llamarles muy particularmente su atencion respecto de que por ningún concepto reciban la justificacion que previenen los párrafos 1.º y 2.º del artículo 27 de la Real Instruccion de 20 de diciembre de 1847 por medio de personas á quienes hubiese alcanzado la pérdida de sus cosechas; porque en la imposibilidad de que puedan realizarlo, caso haya sido general la calamidad, quedan facultados los Ayuntamientos para comprobar los hechos y sus consecuencias por medio de igual número de vecinos y peritos de los de otros Ayuntamientos limitados. Orense 11 de marzo de 1858.—*Luis Romero.*

## ADMINISTRACION PRINCIPAL

DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO  
DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Habiéndose observado que por efecto de una equivocacion natural, al fijar el tipo para la tercera subasta de arriendo de rentas del partido de Ribadavia, anunciada para el día 21 del corriente, en lugar de la cantidad de 15,665 rs. 79 céntimos se expresó la de 13,055 reales 16 céntimos; se advierte al público que el tipo que ha de regir para dicha subasta, es el de los citados 15,665 reales 79 céntimos.

Orense 11 de marzo de 1858.—*José de Torres Nuer.*

En virtud de disposiciones superiores, se saca en arrendamiento público por frutos del corriente año, las fincas rústicas y urbanas que pertenecieron al Clero Secular y Regular, Santuarios y Hermandades, y Fincas adjudicadas por débitos, por partidos judiciales, bajo los presupuestos y el pliego de condiciones que á continuacion se inserta.

La subasta se celebrará el día 28 del actual á las once de su mañana en el despacho del Sr. Gobernador de la provincia, ante su autoridad, el Administrador de propiedades y derechos del Estado y Escribano del juzgado de Hacienda; é igualmente se verificará en dicho día y hora doble subasta en las casas consistoriales de los pueblos que constituyen cabeza de partido, ante el Alcalde constitucional, Procurador síndico y fé del competente Escribano, quedando pendiente de la aprobacion de la Direccion general de propiedades y derechos del Estado.

El remate se empezará por el orden que se figura en este anuncio, y se admitirán las posturas á todos los licitadores que se presenten en la duracion de media hora por cada partido, que tendrá este acto.

	Número de fincas.	Su tipo. Rs. vn.
Partido de la capital. . . . .	255	7,598
de Allariz. . . . .	299	10,540
de Guizo. . . . .	759	18,458
de Ribadavia. . . . .	53	1,998
de Carballino. . . . .	176	6,571
de Bande. . . . .	154	6,686
de Celanova. . . . .	182	6,656
de Verin. . . . .	299	5,545
de Villamartin. . . . .	545	6,046
de Viana. . . . .	261	4,512
de Trives. . . . .	159	2,290

### Modelo de proposicion.

D.... vecino de.... se comprometo á llevar en arrendamiento las fincas que figuran en el presupuesto formado por la Administracion principal de propiedades y derechos del Estado, correspondientes al partido ó al distrito de.... por la suma de.... reales, conformándose en un todo con el pliego de condiciones formulado para este objeto; en virtud del cual, ha entregado en la Caja de depósitos de la Tesoreria de esta provincia la fianza de.... que previene la instruccion, según lo acredita el recibo adjunto. Fecha y firma.

Orense 2 de marzo de 1858.—El Administrador principal, *José de Torres Nuer.*

Pliego de condiciones para la subasta de arrendamiento de las fincas del Clero Secular y Regular, Santuarios y Her-

mandades y Fincas adjudicadas por débitos; cuyo número y tipo se figura en el anuncio de subasta que ha de celebrarse en esta capital y partidos judiciales el 28 del corriente á las once de su mañana, con sujecion á lo prescrito en la Real Instruccion de 16 de junio de 1853.

1.º El remate se celebrará en el local que ocupa el despacho del Sr. Gobernador, ante su autoridad, el Administrador principal de propiedades y derechos del Estado y Escribano del juzgado de Hacienda, y en las casas consistoriales de los pueblos citados, ante el Alcalde constitucional, Procurador síndico y fé de Escribano, quedando pendiente de aprobacion de la Direccion general del ramo.

2.º No se admitirá postura menor que la cantidad que marcan los anuncios por arriendo anual; debiendo acompañar al pliego de proposicion el recibo de la Caja de depósitos del importe del 10 por 100 en concepto de fianza.

3.º Si las fincas tienen labores hechas y frutos pendientes el día de la adjudicacion del arrendamiento, pagará el rematante á prorrata, y en metálico, el valor que á juicio de peritos se gradúe á aquellos.

4.º El rematante queda obligado, al fencer el contrato, á dejar las fincas en el buen estado en que se le entregan, quedando sujeto á satisfacer los daños y perjuicios ó deterioros que á juicio de peritos se notasen.

5.º Las fincas que tengan arbolado ó viñedo, serán cuidadas con el mayor esmero, haciendo las labores de costumbre según el uso del país, y con la absoluta prohibicion de cortar el arbolado, ni menos acotarlo, á no ser la limpia ó poda, bajo la responsabilidad consignada en la condicion anterior.

6.º El arrendatario satisfará por semestres adelantados el importe del arriendo si es de 20,000 reales inclusive en adelante, por trimestres tambien adelantados si excediendo de 500 rs. no llegase á 20,000, y anualmente á su vencimiento cuando no pase de 500 rs.; pero afianzando en este caso á satisfaccion del Administrador principal.

7.º El arriendo se entiende por frutos del corriente año, que principiará á contarse en 1.º de enero y concluirá en fin de diciembre.

8.º Si las fincas, despues de arrendadas, se enagenasen, estará obligado el comprador á respetar el año de arriendo.

9.º No se admitirán posturas á ninguno que sea dendor al Estado.

10. Los arrendatarios no tendrán derecho á pedir perdon ó rebaja, ni solicitar pagar en otros plazos ni en distinta especie que lo estipulado; el contrato ha de ser á suerte y ventura, sin opcion á ser indemnizados por extincion de langosta, pedrisco ó otro incidente imprevisible.

11. Si no cumpliesen la obligacion de pago en los términos contratados, quedarán sujetos á la accion que contra ellos intente la Administracion principal y á satisfacer los daños y perjuicios á que diesen lugar. Si llegase el caso de ejecucion para la cobranza, se entenderá rescindido el contrato en el mismo hecho, y se procederá á nuevo arriendo en quiebra.

12. Satisfarán de su cuenta y riesgo en la Administracion principal de propiedades y derechos del Estado y en monedas corrientes de oro ó plata el importe del arriendo en los plazos marcados.

13. No sufrirán otros desembolsos que el pago de derechos á los escribanos fieles de fechos y pregoneros; siendo igualmente de su cuenta el papel que se invierta en el expediente y escritura, y las dietas de los peritos en caso de justiprecio.

14. Se admiten posturas por partidos judiciales totalizados, y los generales que

quieran presentar los interesados, para lo cual se hallan clasificados convenientemente los presupuestos que rigen para la subasta.

15. No obstante haber eliminado de los actuales presupuestos las fincas enagenadas y satisfechas por los compradores, cualquiera alteracion que en lo sucesivo pueda ofrecer este trabajo, sería objeto de una rectificacion por parte de esta oficina, con referencia á los inventarios y demas antecedentes que existen en la misma.

16. Quedan exceptuadas las casas rectorales, huertas y otras tierras anejas á las mismas; y en el caso de que se hubiera comprendido alguna, se considerará como baja para el arrendatario, previo el expediente de instruccion.

17. Los arrendatarios no podrán utilizarse de las fincas que no consten en los inventarios, y que por consecuencia han dejado de figurar en los presupuestos; pero los serán imputadas las que ademas de las incluidas en ellos, resulten deber arrendarse, bien sea por descubrimiento ó otro concepto. Debiendo ser consideradas como ocultas las que todavía se detentan al Estado, pertenecen única y exclusivamente al dominio de la investigacion, quedando sujetos á las penas de instruccion, los arrendatarios ó colonos que clandestinamente quieran aprovecharse de otras fincas que aquellas de que con referencia á los inventarios facilitará desde luego individual relacion esta Administracion principal.

18. Quedarán tambien sujetos los arrendatarios á las demás condiciones que particularmente se hallan establecidas por las leyes y adoptadas por la costumbre en la provincia, siempre que no se opongan á las contenidas en este pliego; y siendo una de ellas la de satisfacer á los arrendatarios salientes los gastos ocasionados en el cultivo de las tierras de pan llevar ó de otro fruto, queda de cuenta de los entrantes el abono de los legítimos gastos que hayan tenido en dicho cultivo, entendiéndose que estos deberán tambien ejecutarlos para que las fincas no sufran menoscabo alguno, mediante á que es de su obligacion el laboreo de las citadas tierras, que deberá satisfacerseles asimismo por los siguientes arrendatarios que hayan de sucederle.

Orense 2 de marzo de 1858.—El Administrador principal, *José de Torres Nuer.*

### Juzgado de 1.ª instancia de la Cañiza.

Don Gregorio Maria Couceiro, juez de primera instancia de la Cañiza y su partido.—Por el presente se hace saber que en este juzgado y escribania del que autoriza pende causa criminal formada de oficio sobre averiguacion del autor ó autores que robaron dos mulas de color negro, una de ellas de tres años entrada en cuatro, de alada seis cuartas y algo ablancazada por el vientre; y la otra de seis cuartas y media esforzadas, de dos años entrada en tres, que valdrán unos 3,000 reales poco mas ó menos, propias del Abad párroco de santa Maria do Campo en el ayuntamiento de Cobelo de este partido, Don Juan Antonio Espifeira.—Seguida y en sus trámites, por auto del día de ayer he acordado á peticion fiscal, entre otras cosas, publicar el suceso en los Boletines oficiales de las cuatro provincias de Galicia, á fin de que sean detenidas dichas mulas y agresores caso sean habidas, poniendo todo á mi disposicion para los fines de justicia. Dado en la Cañiza á 2 de marzo de 1858.—*Gregorio Maria Couceiro.*—De su mandado, *Manuel Andres de Otero y Carvallo.*